

8 de octubre de 2014

Español y inglés únicamente

Grupo de examen de la aplicación
Continuación del quinto período de sesiones
Viena, 13 a 15 de octubre de 2014
Tema 2 del programa provisional*
Examen de la aplicación de la Convención
de las Naciones Unidas contra la Corrupción

Resumen: Colombia

Nota de la Secretaría

El presente documento circulado en sala de conferencia se pone a disposición del Grupo de examen de la aplicación, según lo estipulado en el párrafo 36 de los Términos de referencia del Mecanismo de examen para la aplicación de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción (Resolución 3/1 de la Conferencia de Estados parte, Anexo). El resumen adjunto pertenece a una revisión de país correspondiente al segundo año del primer ciclo de revisión.

* CAC/COSP/IRG/2014/1/Add.1.



II. Resumen

Colombia

1. Introducción - Sinopsis del marco jurídico e institucional establecido por Colombia en el contexto de la aplicación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción

Colombia firmó la Convención en la conferencia de alto nivel celebrada en la ciudad de Mérida (México) del 9 al 11 de diciembre de 2003. El Congreso aprobó la Ley 970 de 2005, por medio de la cual se aprobó la Convención. La Corte Constitucional declaró la exequibilidad de la Convención mediante la sentencia C-172 de 2006. Colombia depositó el instrumento de ratificación el 27 de octubre de 2006.

Los tratados internacionales forman parte integrante del ordenamiento jurídico interno e invalidan toda disposición contraria, salvo las disposiciones de la Constitución Política. El ordenamiento jurídico colombiano es de tradición jurídica continental. La Ley 599 de 2000 contiene el Código Penal, basado en el sistema continental. El Código de Procedimiento Penal (CPP) actualmente vigente fue establecido por la Ley 906 de 2004, y su aprobación marcó la transición del sistema inquisitorio al tema acusatorio mixto. El proceso penal tiene las fases de indagación, investigación y juicio. Con la Ley 1474 de 2011 (Estatuto Anticorrupción) Colombia adoptó reformas en temas de corrupción. El Gobierno Nacional y el Consejo Nacional de Política Económica y Social crearon a través del documento CONPES (Consejo Nacional de Política Económica y Social) N° 167 de diciembre de 2013 la Política Pública Integral Anticorrupción.

Colombia cuenta con varias instituciones encargadas de implementar el marco normativo anticorrupción en el país. La Secretaría de Transparencia tiene, entre otras, la función, de asesorar y asistir al Presidente de la República en temas de lucha contra la corrupción y de coordinar la implementación de los instrumentos internacionales contra la corrupción. Los órganos de control independientes son el Ministerio Público (compuesto por la Procuraduría General de la Nación, que tiene las funciones preventiva, disciplinaria y de intervención judicial, y la Defensoría del Pueblo, que impulsa la efectividad de los derechos humanos) y la Contraloría General de la República, que tiene a su cargo la vigilancia de la gestión fiscal. Otras instituciones anticorrupción son la Fiscalía General de la Nación (responsable de la acción penal), la Unidad de Inteligencia y Análisis Financiero (UIAF), el Departamento Administrativo de la Función Pública y la Superintendencia Financiera. La Comisión de Moralización a nivel nacional y sus homólogos regionales son instancias colegiadas de coordinación.

Colombia ha ratificado a nivel regional la Convención Interamericana contra la Corrupción y la Convención para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros de la OCDE.

2. Capítulo III - Penalización y aplicación de la ley

2.1. Observaciones sobre la aplicación de los artículos objeto de examen

Soborno y tráfico de influencias (arts. 15, 16, 18 y 21)

El Código Penal regula en su sección XV los delitos contra la administración pública y tipifica en su artículo 407 el cohecho por dar u ofrecer. El citado artículo incorpora en el derecho interno la mayoría de los requisitos del artículo 15 a) de la Convención, aunque el concepto de “promesa” no queda específicamente regulado. El concepto de funcionario público es amplio, concuerda con lo que exige la Convención y asegura responsabilidad en todas las esferas públicas a través de sus distintos rangos de funcionarios, según se regula en el artículo 123 de la Constitución Política, complementado con el artículo 20 del Código Penal.

Los artículos 404, 405 y 406 del Código Penal tipifican los delitos de concusión, cohecho propio y cohecho impropio (artículo 15 b) de la Convención). Asimismo, Colombia ha dictado sentencias condenatorias contra funcionarios de rango medio y alto.

Respecto al soborno de funcionarios públicos extranjeros y funcionarios de organizaciones internacionales públicas, Colombia incorporó a través del Estatuto Anticorrupción el delito de soborno transnacional (art. 16, párr. 1, de la Convención), aunque no prevé específicamente el concepto de “promesa”. El Estado no ha implementado aún el artículo 16, párrafo 2.

Colombia ha incorporado modificaciones a su legislación en cuanto a la conducta descrita en el artículo 18 de la Convención (tráfico de influencias) en su artículo 411 del Código Penal, relativo al tráfico de influencias de servidores públicos, y el 411-A, relativo al tráfico de influencias de particulares. Se observa, no obstante, la necesidad de complementar en su totalidad los requisitos del artículo 18 de la Convención. En su actual redacción no se incluyen las conductas de promesa, ofrecimiento o concesión de un beneficio a una persona para que esta abuse de su influencia real o supuesta en el Estado, o la solicitud o aceptación con el mismo fin.

Colombia ha realizado avances para incorporar en su legislación el delito de soborno en el sector privado (artículo 21 de la Convención) con el nuevo artículo 250 A del Código Penal, relativo a la corrupción privada. Se observa que en la actual redacción el delito se limita a un determinado tipo de personal y requiere la existencia de un perjuicio.

Blanqueo de dinero, encubrimiento (arts. 23 y 24)

El artículo 323 del Código Penal, en su inciso 1), penaliza el lavado de activos e incluye como delito fuente, entre otros, el enriquecimiento ilícito y los delitos contra la administración pública. Asimismo los artículos 446 y 447 del Código Penal, respectivamente, sobre favorecimiento y receptación, complementan los requisitos del apartado a), párrafo 1, del artículo 23 de la Convención. El apartado b) se encuentra incorporado por el artículo 447 y las disposiciones de la Parte General del Código Penal, con excepción del concepto de la “utilización” de bienes (artículo 23, párrafo 1 b) i)). La asociación y confabulación para un delito no quedan reguladas. El artículo 323 del Código Penal abarca la comisión del delito fuera del territorio nacional y el caso en que el delito se cometa por las personas que hayan cometido el delito determinante (art. 23 párr 2 e).

Los artículos 446 y 447 del Código Penal, así como el artículo 326 sobre el “testaferrato”, tipifican el encubrimiento de bienes producto de delito (art. 24 de la Convención).

Malversación o peculado, abuso de funciones y enriquecimiento ilícito (arts. 17, 19, 20 y 22)

Colombia tipifica la malversación o peculado (art. 17 de la Convención) en los artículos 397, sobre el peculado por apropiación, 398, sobre el peculado por uso, y 399, sobre el peculado por aplicación oficial diferente. El Estado examinado también proporcionó ejemplos de decisiones judiciales y estadísticas.

El derecho penal colombiano tipifica el abuso de funciones (art. 19 de la Convención) en los artículos 413, sobre el prevaricato por acción, 413, sobre el prevaricato por omisión, 416, sobre el abuso de autoridad por acto arbitrario e injusto, y 428, sobre el abuso de función pública, sin hacer referencia al elemento limitativo de la finalidad de obtener un beneficio indebido.

Colombia penaliza el enriquecimiento ilícito (art. 20 de la Convención) en el artículo 412 del Código Penal, y el enriquecimiento ilícito de particulares en el artículo 327.

El delito de malversación en el sector privado (art. 22 de la Convención) está tipificado por los artículos 250 *bis* del Código Penal, sobre la administración desleal, 249, sobre el abuso de confianza, y 250, sobre el abuso de confianza calificado.

Obstrucción de la justicia (art. 25)

El Código Penal establece entre los delitos contra la eficaz y recta impartición de justicia el soborno (artículo 444), el soborno en la actuación penal (art. 444A) y las amenazas a testigo (art. 454 A). No queda regulado el uso de la fuerza física contra un testigo, ni específicamente la obstrucción de justicia en asuntos relacionados con la aportación de pruebas.

El uso de violencia para obstaculizar el cumplimiento de funciones oficiales está penalizado en los artículos 429, sobre la violencia contra servidor público, y 430, sobre la perturbación de actos oficiales; la intimidación y amenaza por el mismo fin no quedan reguladas.

Responsabilidad de las personas jurídicas (art. 26)

Colombia prevé que la responsabilidad penal recaiga en la persona natural. No obstante, existen consecuencias penales accesorias para las personas jurídicas, como la suspensión o cancelación de la personería jurídica (artículo 91 CPP). El Estatuto Anticorrupción extiende la sanción a aquellos casos en que haya beneficios resultantes de delitos de corrupción. En el ámbito administrativo, la Superintendencia de Sociedades puede aplicar multas según lo regulado en el artículo 86 de la Ley 222 de 1995, y la Procuraduría de la Nación puede excluir empresas de la contratación pública. Colombia ha suministrado información estadística y casos a modo de ejemplos de implementación. En cuanto a la responsabilidad civil, una persona jurídica puede ser vinculada al proceso penal como tercero civilmente responsable.

Participación y tentativa (art. 27)

Los artículos 27 y 30 del Código Penal regulan las formas de participación en grado de tentativa, complicidad y determinante. La preparación de delitos de corrupción no está regulada.

Proceso, fallo y sanciones; cooperación con las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley (arts. 30 y 37)

Colombia considera los delitos de corrupción como delitos graves punibles con penas amplias. Los altos funcionarios, incluyendo el Presidente de la República, están sujetos a un régimen de investigación especial, pero no hay funcionario con inmunidad judicial. El CPP contempla el principio de oportunidad en sus artículos 321 a 324, según los cuales la Fiscalía puede renunciar a la acción penal, entre otras circunstancias, cuando el imputado o acusado preste una colaboración eficaz dentro de la investigación. Según el Estatuto Anticorrupción, ni la libertad en espera de juicio o apelación, ni la detención domiciliaria, ni la libertad anticipada o condicional son aplicadas a casos de corrupción (art. 314, art. 68 A CPP). Colombia tiene un Código Disciplinario Único y ha presentado ejemplos de su aplicación. No existe la suspensión provisional del funcionario durante el proceso penal.

Los artículos 44, 45 y 52 del Código Penal, así como el artículo 44 del Código Disciplinario Único, prevén la pena de la inhabilitación de cargos públicos y de cualquier cargo.

Dentro del proceso penal colombiano existe la posibilidad de que los investigados o procesados obtengan beneficios legales, incluso la extinción de las acciones, a cambio de su colaboración eficaz, a través de las figuras de los preacuerdos y del principio de oportunidad y la mitigación de la pena del colaborador con la justicia.

Protección de testigos y denunciantes (arts. 32 y 33)

La Ley 418 de 1997, establece un marco de protección de testigos, víctimas e intervinientes en el proceso y funcionarios de fiscalía y crea un programa de protección para esas personas, bajo la responsabilidad de la Oficina de Protección y Asistencia de la Fiscalía General. Si bien hay experiencia en aplicar este marco a casos de delitos por estupefacientes, no hay mucha en aplicarlo a casos de corrupción. No existen acuerdos internacionales vinculantes sobre la reubicación internacional de testigos.

Todas las medidas de protección de testigos son aplicables a los denunciantes. En el ámbito laboral, existe la Ley 1010, que establece garantías a fin de evitar represalias como acoso laboral. El Estatuto Anticorrupción busca brindar mayores garantías y sanciones a aquellos funcionarios públicos que abusan de sus funciones en perjuicio de denunciantes. A pesar de las medidas mencionadas, se observa con preocupación que los denunciantes en muchos casos todavía están expuestos a desventajas y riesgos. El artículo 43 de la Ley 1474 de 2011 establece como falta gravísima cualquier acto arbitrario e injustificado contra otro servidor público que haya denunciado hechos de corrupción.

Embargo preventivo, incautación y decomiso; secreto bancario (arts. 31 y 40)

El ordenamiento jurídico contiene los conceptos de decomiso del producto e instrumento del delito (art. 100 del Código Penal, art. 82 del CPP) y de extinción de

dominio (Ley 793 de 2002). Se notó que la práctica de investigación y enjuiciamiento penal todavía no se aplica sistemáticamente al producto de delito en casos de corrupción.

El CPP, en sus artículos 83 a 85, regula el embargo preventivo y la incautación por la Fiscalía a través del juez de garantías. La Contraloría tiene el poder de incautación administrativa. El Fondo Especial para la Administración de Bienes de la Fiscalía General de la Nación se creó mediante el artículo 86 del CPP.

Colombia no ha legislado acerca del decomiso de los fondos transformados o convertidos parcial o totalmente en otros bienes, el decomiso por valor de bienes mezclados con bienes de fuentes lícitas, o de los beneficios derivados de bienes.

Existe la carga dinámica de la prueba en la extinción de dominio, en contrario al sistema de decomiso. Sin embargo, la jurisprudencia sobre el tema sigue en desarrollo. La Corte Constitucional recientemente decidió que en la extinción de dominio sobre el producto del enriquecimiento ilícito, la Fiscalía tiene obligación de probar el origen ilícito del bien.

En Colombia el secreto bancario se puede levantar por orden de la Unidad de Información y Análisis Financiero, la Fiscalía General de la Nación, el Ministerio Público y la Contraloría General, sin requisito de orden judicial.

Prescripción; antecedentes penales (arts. 29 y 41)

La legislación penal colombiana contempla que la acción penal prescribirá en un tiempo igual al máximo de la pena fijada en la ley, si fuera privativa de la libertad, pero en ningún caso será inferior a cinco (5) años, ni excederá de veinte (20) años. Para funcionarios públicos el plazo de prescripción se aumenta por la mitad. No se regulan los casos de presuntos delincuentes que hayan eludido la administración de justicia. En los delitos de corrupción el plazo de la prescripción es de entre 6 y 20 años.

En Colombia solamente las sentencias nacionales constituyen antecedentes penales.

Jurisdicción (art. 42)

Colombia ha establecido la mayoría de los parámetros de jurisdicción establecidos en la Convención.

Consecuencias de los actos de corrupción; indemnización por daños y perjuicios (arts. 34 y 35)

Colombia incorpora el artículo 34 de la Convención mediante sus artículos 22 y 101 del CPP, en los cuales se dispone el restablecimiento del derecho anterior con el fin de hacer cesar los efectos del delito. Adicionalmente, la Ley 472 de 1988 permite proteger los intereses difusos o colectivos permitiendo la revisión de un contrato, a través de una acción popular. En el ámbito administrativo, el Procurador General puede solicitar la suspensión del procedimiento administrativo, contratos o su ejecución a fin de evitar perjuicios al patrimonio estatal.

Los artículos 11 c) y 102 CPP regulan y complementan el procedimiento penal en cuanto a la reparación integral de la víctima dentro del proceso penal. Existe práctica operativa en la aplicación de la ley, aunque todavía no en delitos de

corrupción. Asimismo, la Ley 610 de 2000 y el Estatuto Anticorrupción, regulan el proceso de responsabilidad fiscal, mediante el cual se persiguen los bienes de los funcionarios que con su acción u omisión, independientemente de que constituya delito, hayan ocasionado un detrimento patrimonial al Estado. El Estatuto Anticorrupción modificó el artículo 401 del Código Penal, y actualmente se dispone como razón de atenuación punitiva la reparación del daño o el reintegro de lo apropiado.

Autoridades especializadas y coordinación entre organismos (arts. 36, 38 y 39)

Las autoridades independientes encargadas de la aplicación de la ley y especializadas en la lucha contra la corrupción son la Fiscalía General, el Ministerio Público y la Contraloría General.

La Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría tienen un convenio que les autoriza compartir información sobre casos. La Policía Judicial no cuenta con investigadores especializados en temas de corrupción. También existe un comité de coordinación contra la corrupción, entre las mencionadas tres instituciones más otras instituciones relevantes. Sin embargo, se mencionó que el intercambio de información enfrenta retos y límites, en particular en lo que concierne al intercambio de pruebas y la fase de investigación.

Colombia mantiene una cooperación muy activa con el sector privado, a través del Mecanismo de Denuncias de Alto Nivel para derrotar la corrupción, en cooperación con la OCDE y el Instituto de Basilea, y de reuniones de investigación sobre casos concretos. Sin embargo, se mencionó que en el sector privado persiste el desconocimiento de las normas y posibilidades de participación. Colombia ha tomado medidas para alentar a sus ciudadanos a denunciar la corrupción; sin embargo, se observa con gran preocupación que la denuncia en Colombia no está considerada como una práctica segura para la seguridad física y laboral del denunciante.

2.2. Logros y buenas prácticas

- Colombia cuenta con casos concretos de aplicación y decisiones judiciales condenatorias con plazos de prescripción amplios y sentencias severas para delitos establecidos de acuerdo con la Convención, tomando en cuenta el marco sancionatorio general (art. 29, art. 30, párr. 1).
- Colombia ha presentado sentencias en las que un acto de corrupción fue motivo para decidir la cancelación o anulación de contratos en los que el Estado era parte (art. 34).
- Colombia activamente promueve la cooperación con el sector privado a nivel nacional e internacional. En ese contexto, Colombia es el país piloto en el Mecanismo de Denuncias de Alto Nivel para derrotar la corrupción, en cooperación con la OCDE y el Instituto de Basilea, así como el Grupo de Trabajo B-20 del Grupo de los 20 (art. 39, párr. 1).

2.3. Problemas en la aplicación

Se recomienda a Colombia que:

- haga seguimiento a la aplicación de los artículos 407 y 433 del Código Penal con el fin de monitorear que sean aplicados a los casos de “promesa” de un beneficio indebido. En el evento en que la jurisprudencia cambie se podría pensar en una clarificación vía una reforma legislativa (art. 15, párr. a, y art. 16, párr. 1);
- considere la posibilidad de penalizar el cohecho pasivo de funcionarios públicos extranjeros y funcionarios de organizaciones internacionales (art. 16, párr. 2);
- considere la posibilidad de adaptar la legislación al artículo 18 de la Convención (apartados a y b);
- estudie la posibilidad de adaptar su legislación interna para que abarque la corrupción en el sector privado con respecto a todos los empleados de una entidad privada, y sin requisito de perjuicio a la sociedad (art. 21, apartados a y b);
- De alcance, en el delito de lavado de activos, al concepto de “utilización” (art. 23, párr. 1 b i));
- Suministre oficialmente copias de su legislación sobre blanqueo del producto del delito (art. 23, párr. 2 d));
- De alcance, en la legislación sobre la obstrucción de justicia, a los elementos del uso de la fuerza física contra testigos y, en regla específica, a la aportación de pruebas (art. 25, párr. a));
- adapte su legislación para incluir las amenazas o intimidación a funcionarios de la justicia o de los servicios encargados de hacer cumplir la ley (art. 25, párr. b));
- Colombia podría estudiar las medidas necesarias para tipificar como delito la preparación con miras a cometer un delito de corrupción (art. 27, párr. 3);
- Se recomienda que Colombia, en los casos en que el presunto delincuente elude la justicia, cuente con un plazo ampliado de prescripción (art. 29).
- También se podría estudiar la posibilidad de igualar el aumento de la prescripción de los particulares a la de los funcionarios públicos, en casos de corrupción (art. 29);
- Considere, de acuerdo con los principios fundamentales de su ordenamiento jurídico, establecer procedimientos en virtud de los cuales los funcionarios públicos acusados de un delito de corrupción puedan ser destituidos, suspendidos o reasignados (art. 30, párr. 6);
- De alcance en su legislación de decomiso, al decomiso de fondos transformados o convertidos en otros bienes, al decomiso por valor de bienes mezclados con otros provenientes de fuentes lícitas, y a los ingresos u otros beneficios derivados de ese producto del delito (art. 31 párr. 4-6).
- Considere la posibilidad de celebrar acuerdos o arreglos con otros Estados para la Reubicación de testigos, peritos y víctimas (art. 32, párr. 3);

- Fortalezca la efectividad de la protección de denunciantes en el derecho penal, administrativo y laboral. Se podría considerar hacer esfuerzos para proporcionar la misma protección en el procedimiento disciplinario (art. 33);
- Haga esfuerzos por que las autoridades pertinentes elaboren estrategias para la investigación patrimonial-financiera, el decomiso y la reparación del daño en casos de corrupción desde el inicio del caso, incluso mediante el intercambio de información entre las instituciones (art. 31 y 35);
- Exponga al personal del Consejo Superior de la Judicatura a experiencias comparadas en sus funciones y dentro de un marco de desarrollo profesional continuo;
- Tome medidas, de acuerdo a su legislación nacional, para permitir a sus instituciones de investigación penal y de asuntos disciplinarios y administrativo-fiscales compartir entre ellas, sin perjuicio de garantizar el secreto de la fase de indagación, toda información relevante sobre casos de corrupción en cualquier fase del proceso, y mejore los mecanismos para el intercambio de información (art. 38);
- Siga aplicando medidas para socializar las políticas anticorrupción con el sector privado (art. 39, párr. 1) y seguir fortaleciendo los mecanismos de denuncia anónima y segura (art. 39, párr. 2);
- Colombia podrá estudiar la adopción del principio de la reincidencia internacional (art. 41);
- Colombia podrá considerar establecer su jurisdicción sobre todos los casos en que el delito se cometa contra uno de sus nacionales (art. 42, párr. 1 c));
- Se alienta a Colombia que realice en la práctica las consultas pertinentes en los casos en que varios Estados partes estén realizando una investigación, un proceso o una actuación judicial respecto de los mismos hechos (art. 42, párr. 5).

2.4. Necesidades de asistencia técnica para mejorar la aplicación de la Convención

El Estado colombiano ha expresado interés en recibir asistencia técnica en las siguientes esferas para mejorar la aplicación del capítulo III:

- Legislación tipo y resumen de buenas prácticas y lecciones aprendidas (art. 16, párr. 2);
- Intercambio de buenas prácticas y cooperación internacional en materia de incautación, decomiso y extinción de dominio; particularmente programas de capacitación para autoridades responsables de rastrear bienes y administrar bienes embargados preventivamente, incautados o decomisados.

3. Capítulo IV - Cooperación internacional

3.1. Observaciones sobre la aplicación de los artículos objeto de examen

Extradición; traslado de personas condenadas a cumplir una pena; remisión de actuaciones penales (arts. 44, 45 y 47)

Los requisitos para la extradición están contenidos en el artículo 35 de la Constitución Política, el artículo 18 del CP, los artículos 490 a 504 del CPP y los tratados de extradición. Colombia no sujeta la extradición a la existencia de un tratado sino que puede extraditar de acuerdo con la legislación interna, sobre la base del principio de reciprocidad. La Convención puede ser utilizada como base jurídica de la extradición, aunque ante la existencia de un acuerdo bilateral se da preferencia a la aplicación de este. En la actualidad, Colombia tiene suscritos 13 tratados bilaterales y 2 multilaterales de extradición.

Colombia requiere la doble incriminación, y además exige una pena mínima de cuatro años (art. 493 del CPP), pena prevista para la mayoría, pero no para todos, los delitos de corrupción. Sin embargo, la normativa interna solamente se aplica cuando ningún instrumento internacional aplicable prevea pena mínima inferior.

Colombia extradita a sus nacionales como práctica frecuente, por conductas cometidas después del 17 de diciembre de 1997. Con respecto a las conductas cometidas anterior a esa fecha, Colombia aplica el principio “aut dedere aut judicare” basándose en sus tratados o como un principio general de derecho internacional.

El sistema de extradición en el derecho colombiano es un sistema mixto (judicial-administrativo). La extradición se debe solicitar por nota diplomática, en español. Según el artículo 492 del CPP, la oferta o concesión de la extradición es facultativa del Gobierno, pero requiere concepto previo y favorable de la Corte Suprema de Justicia, que revisa cuestiones de formalidad. No existe apelación. Contra la decisión final del Gobierno Nacional corresponde el recurso de reposición. En el procedimiento simplificado, la persona requerida puede renunciar al procedimiento ante la Corte.

En materia de corrupción, todavía no se han presentado casos de extradición pasiva y solamente dos casos de extradición activa.

La extradición por delitos conexos no está prevista en el sistema jurídico de Colombia. No procede la extradición por delitos políticos; los delitos de corrupción no se consideran políticos.

Los tratados bilaterales concertados por Colombia, y el artículo 509 del CPP, establecen la procedencia de la detención provisional de la persona solicitada en extradición.

El trámite previsto no prevé la posibilidad de que la decisión negativa que adopte el Estado colombiano sea previamente consultada con el Gobierno requirente.

Colombia es parte en tres acuerdos bilaterales sobre traslado de personas condenadas.

Colombia no puede renunciar a la jurisdicción propia; sin embargo, en el caso en que varios Estados tengan jurisdicción, Colombia puede remitir el caso a otro Estado.

Asistencia judicial recíproca (art. 46)

La cooperación judicial está reglamentada en los artículos 484 a 489 del CPP y en los 16 tratados de asistencia judicial recíproca bilaterales y dos tratados multilaterales en que Colombia es parte.

Colombia no requiere la doble incriminación, y puede facilitar asistencia en procedimientos contra personas jurídicas.

Los acuerdos bilaterales y multilaterales tienen prevalencia sobre el derecho interno, y los párrafos 7 y 9 a 29 se pueden aplicar directamente, aunque todavía no se han dado casos.

Colombia ha designado cuatro autoridades centrales en materia de asistencia judicial recíproca: Fiscalía General de la Nación y Ministerio de Justicia en asuntos penales, Procuraduría General en asuntos disciplinarios y Contraloría General en asuntos fiscales-resarcitorios. Las solicitudes de asistencia judicial recíproca se reciben directamente por las autoridades centrales o por canales diplomáticos. Las autoridades competentes para las diligencias podrán comunicarse directamente con sus contrapartes extranjeras. El intercambio de información se realiza de manera formal y con solicitud previa.

Parece que puede haber casos en los que las competencias y responsabilidades de las cuatro autoridades se pueden superponer o las autoridades pueden tratar la misma conducta desde diferentes ángulos. También parece que no existe claridad entre todas las autoridades domésticas y extranjeras respecto a la designación de las autoridades centrales.

Las solicitudes pueden hacerse oralmente, por télex, facsímil o correo electrónico en situaciones de urgencia; sin embargo, oralmente no es el camino preferido. El testimonio por videoconferencia es una práctica frecuente.

Colombia no limita la aplicación del artículo 46 exclusivamente a la cooperación internacional en materia penal, sino que la hace extensiva también a la cooperación internacional en materia administrativa.

El plazo de ejecución de una solicitud es, en promedio, de entre 6 meses y 1 año; las solicitudes sencillas se pueden tramitar en dos o tres días.

De acuerdo con la legislación, la parte interesada en el auxilio de la asistencia judicial correrá con los gastos de la asistencia; sin embargo, varios de los tratados en que Colombia es parte contienen reglas en conformidad con la Convención.

Cooperación en materia de cumplimiento de la ley; investigaciones conjuntas; técnicas especiales de investigación (arts. 48, 49 y 50)

Colombia considera la Convención como la base para la cooperación recíproca en materia de cumplimiento de la ley. La policía de Colombia coopera con las fuerzas policiales de otros países, de manera directa o a través de la INTERPOL. Varias autoridades han concluido memorandos de entendimiento con sus homólogos extranjeros. Se interactúa con el Grupo Egmont (UIAF) y la Organización Mundial de Aduanas (Aduana Nacional), la Red Iberoamericana de Cooperación Jurídica Internacional (IberRed – Fiscalía General) y la Plataforma Mundial de Puntos de Contacto en materia de recuperación de activos de la INTERPOL y la Iniciativa StAR (Contraloría). La Fiscalía está promoviendo iniciar la cooperación por la Red Hemisférica de la Organización de los Estados Americanos.

El artículo 487 del CPP regula las investigaciones conjuntas.

Colombia ha regulado la entrega vigilada, la vigilancia electrónica y las operaciones encubiertas, además de otras técnicas como la búsqueda selectiva en bases de datos

sin autorización judicial previa; no se han suscrito acuerdos o arreglos bilaterales o multilaterales sobre el uso de dichas técnicas, pero se puede proceder sobre la base de la Convención.

3.2. Logros y buenas prácticas

- Colombia ha presentado una solicitud de extradición basándose en la Convención (art. 44).
- Con la adopción del procedimiento simplificado se ha demostrado que Colombia está implementando nuevas soluciones para que la extradición sea todo lo expedita posible (art. 44, párr. 9).
- Colombia no cuenta con casos registrados en los que se haya negado la asistencia judicial recíproca en casos de corrupción (art. 46).
- Colombia coopera a través de redes internacionales como la IberRed para agilizar el proceso de asistencia judicial recíproca (art. 46, párr. 24).
- Colombia ha adoptado las técnicas especiales de investigación mencionadas en la Convención y técnicas adicionales, y la Fiscalía General ha aprobado una resolución sobre su aplicación en la cooperación internacional (art. 50, párr. 1).

3.3. Problemas en la aplicación

Colombia podrá:

- Considerar modificar su legislación para poder conceder la extradición aunque no haya doble incriminación (art. 44, párr. 2);
- Asesorar a sus autoridades para que apliquen la Convención directamente cuando la solicitud de extradición incluya varios delitos conexos, de los cuales algunos no sean extraditables debido a la pena mínima prevista (art. 44, párr. 3).

Se recomienda a Colombia que:

- Considere regular la cuestión de la discriminación específicamente en el contexto de la extradición, o, en su defecto, aplique a la Convención directamente (art. 44, párr. 15);
- Adapte su sistema jurídico de manera que el Estado requirente tenga oportunidad de presentar sus opiniones antes de denegar la extradición (art. 44, párr. 17);

Colombia podrá, sin que se le solicite previamente, transmitir información relativa a cuestiones penales a una autoridad competente de otro Estado parte si cree que esa información podría ayudar en sus indagaciones y procesos penales, y se alienta a Colombia considerar esa posibilidad (art. 46, párrs. 4 y 5).

Se recomienda a Colombia que:

- Aplique los párrafos 9 a 29 de la Convención a las solicitudes de asistencia judicial recíproca en ausencia de un tratado bilateral, y aplique dichos párrafos en lugar de un tratado si facilitan la cooperación;

- Aplique directamente la Convención para garantizar el salvoconducto a las personas trasladadas de otro Estado para prestar testimonio o para ayudar de alguna otra forma a obtener pruebas, con respecto a condenas anteriores a su salida de dicho otro Estado (art. 46, párr. 12);
- Asegure que las competencias y responsabilidades de las cuatro autoridades centrales de asistencia judicial recíproca estén bien definidas y explicadas en el directorio de autoridades centrales de la UNODC. También se alienta a Colombia a crear un mecanismo que asegure el rápido intercambio de información entre las cuatro autoridades centrales y a sensibilizar a todos los actores del sistema institucional de su existencia (art. 46, párr. 13);
- Se aliente a la Procuraduría y la Fiscalía a que notifiquen al Secretario General de las Naciones Unidas el idioma o idiomas que le son aceptables (art. 46, párr. 16);
- Aplique directamente el párrafo 20 del artículo 46, sobre las reservas acerca de las solicitudes recibidas (art. 46, párr. 20);
- Aplique directamente la Convención por encima de otros instrumentos en caso de que estos contengan motivos de negación más amplios (art. 46, párr. 21);
- Con respecto a los costos, aplique los instrumentos internacionales directamente, como arreglo entre los Estados partes (art. 46, párr. 28);
- Considere promover el intercambio de personal y otros expertos, incluida la designación de oficiales de enlace (art. 48, párr.1 e)).

3.4. Necesidades de asistencia técnica para mejorar la aplicación de la Convención

Colombia ha solicitado asistencia técnica para mejorar la cooperación internacional:

- Capacitación de funcionarios en materia de asistencia judicial recíproca y sensibilización sobre el uso de la Convención en esa esfera (art. 46);
- Fortalecimiento de la práctica de las técnicas especiales de investigación en casos de corrupción (art. 50);
- Creación de capacidad en la cooperación internacional en material de recuperación de activos.

II. Executive summary

Colombia

1. Introduction: Overview of the legal and institutional framework of Colombia in the context of implementation of the United Nations Convention against Corruption

Colombia signed the United Nations Convention against Corruption during the High-level Conference held in Mérida, México, from 9 to 11 December 2003. The Colombian Congress issued Law 970 of 2005, by which the Convention was approved. The Constitutional Court declared the enforceability of the Convention through sentence C-172 of 2006. Colombia deposited the ratification instrument on 27 October 2006.

International treaties are an integral part of the domestic legal system and prevail over any contrary provision, except for those of the Political Constitution. The Colombian legal order follows the civil law tradition. Law 599 of 2000 contains the Penal Code and is based on the civil law system. The current Criminal Procedure Code (CPC) was established by Law 906 from 2004 and marked the transition of the inquisitorial to the mixed-accusatorial system. The criminal process is structured in the preliminary stage, the investigation stage and the trial stage. With Law 1474 of 2011 (Anti-Corruption Statute), Colombia adopted anti-corruption reforms. The National Government and the National Council for Economic and Social Policy established in the document CONPES (National Council for Economic and Social Policy) No. 167 from December 2013 the National Integrated Public Anticorruption Policy.

Colombia has various institutions responsible for implementing the normative framework for the fight against corruption in the country. The Ministry for Transparency has, among others, the function to advise and assist the President of the Republic in anti-corruption policies and coordinate the implementation of the international anti-corruption instruments. The independent control organs are the Public Attorney's Office (consisting of the Attorney-General's Office, which has a function of prevention, a disciplinary function and one of judicial intervention, and the Public Defence Agency, responsible for enhancing the effectiveness of human rights), and the Comptroller-General's Office which is responsible for the monitoring of the financial administration. Other organs for the fight against corruption are the Prosecutor-General's Office (responsible for exercising the criminal action), the Financial Intelligence and Analysis Unit (FIU), the Administrative Department of the Public Service and the Superintendence for Finance. The Morality Commission at the national level and its regional counterparts are collegial organs for coordination.

Colombia has also ratified at the regional level the Inter-American Convention against Corruption, and the OECD Convention on Combating Bribery of Foreign Public Officials.

2. Chapter III: Criminalization and law enforcement

2.1. Observations on the implementation of the articles under review

Bribery and trading in influence (articles 15, 16, 18, 21)

The Criminal Code regulates in its section XV the Offences against Public Administration, criminalizing in its article 407 the bribery by giving and offering. Said article incorporates in the domestic law the major part of the requirements corresponding article 15 a) of the Convention, although the concept of “promise” is not specifically regulated. The concept of public official is broad and consistent with the requirements of the Convention, and assures responsibility in all public spheres and different ranks of officials, as regulated in article 123 of the Political Constitution, complemented by article 20 Criminal Code.

Articles 404, 405 and 406 criminalize the offences of extortion, proper bribery and improper bribery (art. 15 b) of the Convention). Colombia has also offered sentences with convictions against medium and high ranking officials.

With regard to the bribery of foreign public officials and officials of public international organizations, Colombia adopted through the Anti-Corruption Statute the offence of transnational bribery, art. 433 of the Criminal Code (art. 16 para. 1 of the Convention), although the concept of “promise” is not explicitly contained. The State has not yet implemented article 16 para. 2.

Colombia has incorporated modifications to its legislation on the conduct described in article 18 of the Convention (trading in influence) in articles 411, trading in influence by a public official, and 411 A of the Criminal Code, trading in influence by a private person. However, the need to regulate all requirements of article 18 of the Convention is noted. In its current wording, the legislation does not include the conducts of promise, offering or giving an advantage to a person so that he or she abuse his or her real or supposed influence towards the State, or the solicitation or acceptance with the same purpose.

Colombia has made efforts to incorporate in its legislation the offence of bribery in the private sector (art. 21 of the Convention) with the new article 250 A of the Criminal Code, corruption in the private sector. It is noted that in the current wording the offence is limited to certain types of personnel and requires the existence of damage.

Money-laundering, concealment (articles 23, 24)

Article 323 of the Criminal Code in its paragraph 1 criminalizes money-laundering and includes as predicate offences, among others, illicit enrichment and the offences against public administration. Also, articles 446 and 447 of the Criminal Code, respectively on favouring and concealment of proceeds of crime, complement the requirements of article 23 paragraph 1 a) of the Convention. Paragraph 1 b) is implemented by article 447 and the provisions of the General Part of the Criminal Code, with exception of the concept of “use” of assets (article 23 paragraph 1 b i). The association with or conspiracy to commit an offence are not regulated. Article 323 of the Criminal Code covers the commission of an offence outside of the national territory and the case in which the offence is committed by the persons who committed the predicate offence (article 23 para. 2 e).

Articles 446 and 447 of the Criminal Code, as well as article 326, use of strawmen, criminalizes the concealment of assets that are proceeds of crime (art. 24 of the Convention).

Embezzlement, abuse of functions and illicit enrichment (articles 17, 19, 20, 22)

Colombia has criminalized embezzlement and misappropriation (art. 17 of the Convention) in articles 397, misappropriation of public funds, 398, wrongful use of public resources and 399, different official use of public resources. The State party under review provided also examples of judicial resolutions and statistics.

The Colombian criminal law establishes as an offence the abuse of functions (art. 19 of the Convention) in articles 413, perversion of the course of justice by acting, 414, perversion of the course of justice by refraining from acting, 416, abuse of authority through an arbitrary and unfair act, and 428, abuse of public functions, without making reference to the limiting element of the “purpose of obtaining an undue advantage”.

Colombia criminalizes illicit enrichment (art. 20 of the Convention) in article 412 Criminal Code, and illicit enrichment of private persons in article 327 Criminal Code.

Embezzlement in the private sector (art. 22 of the Convention) is criminalized in articles 250 Bis of the Criminal Code, disloyal administration, article 249, abuse of trust, and 250, qualified abuse of trust.

Obstruction of justice (article 25)

The Criminal Code establishes among the offences against the efficient and right administration of justice the offences of bribery (art. 444), bribery in criminal proceedings (art. 444 A), and threats against witnesses (art. 454 A). The use of violence against a witness is not regulated, nor explicitly the obstruction of justice in the production of evidence.

The use of violence for obstructing official functions is criminalized in article 429, violence against public official, and 430, disturbance of official acts; the intimidation and threats for the same purpose are not regulated.

Liability of legal persons (article 26)

Colombia foresees that the criminal responsibility concerns the natural person. However, there are accessory criminal sanctions for legal persons such as their suspension or cancellation (art. 91 CPC). The Anticorruption Statute extends the sanction to those cases in which there are benefits resulting from corruption offences.

In the administrative field, the Superintendence of Societies can apply fines in accordance with article 86 of Law No. 222 of 1995, and the Attorney-General's Office can exclude companies from public procurement. Colombia has provided statistical information and cases as examples of implementation.

At the level of civil responsibility, a legal person can be included in the criminal process as a responsible third person.

Participation and attempt (article 27)

Articles 27 and 30 of the Criminal Code regulate as forms of participation the attempt, participation in and instigation of an offence. The preparation of corruption offences is not regulated.

Prosecution, adjudication and sanctions; cooperation with law enforcement authorities (articles 30, 37)

Colombia considers corruption offences as serious offences and applies a broad range of sanctions. High officials, including the President of the Republic, are subject to a special investigation regime, but no official has judicial immunity. The CPC contains the principle of opportunity in articles 321-324, according to which the Prosecutor's Office can waive the criminal action, among other circumstances, when the indicted or accused person provides efficient collaboration in the investigation. In accordance with the Anticorruption Statute, neither release pending trial and appeal nor house arrest, nor early release or parole are applied in cases of corruption (art. 314 paragraph, art. 68 A CPC). Colombia has a Unified Disciplinary Code and has provided examples of its application. There is no provisional suspension of an official during the criminal process.

Articles 44, 45 and 52 of the Criminal Code, as well as art. 44 of the Unified Disciplinary Code, foresee the sanction of disqualification of public office or of any other office.

In the Colombian criminal process, investigated and indicted persons can obtain legal benefits including the extinction of the criminal action, in exchange for their effective collaboration, in the forms of pre-agreements and the principle of opportunity, and the mitigation of punishment of the person collaborating with justice.

Protection of witnesses and reporting persons (articles 32, 33)

Law No. 418 from 1997 establishes a framework for the protection of witnesses, victims, persons intervening in the process and officials of the Prosecutor's Office, and creates a Protection Programme for these persons, under the responsibility of the Office for Protection and Assistance of the Prosecutor-General's Office. Although there is experience in applying this framework to drug cases, there is not much experience in its application to corruption. There are no binding international agreements on the international relocation of witnesses.

All protection measures are also applicable to whistle-blowers. In the labour context, Law No. 1010 establishes guarantees with a view to prevent harassment and reprisals. The Anticorruption Statute seeks to provide better guarantees and sanctions to public officials who abuse their functions against whistle-blowers. Notwithstanding these measures, it is noted with concern that whistle-blowers are in many cases still considered to be exposed to disadvantages and risks. Article 43 of Law 1474 from 2011 establishes as serious misconduct any arbitrary or unjustified act against a public civil servant who reported acts of corruption.

Freezing, seizing and confiscation; bank secrecy (articles 31, 40)

The legal system contains the legal institutes of confiscation of the product and instruments of the offence (art. 100 Criminal Code, 82 CPC) and of non-conviction based forfeiture (Law 793 of 2002). It was noted that the criminal investigation and adjudication practice in corruption cases is not systematically focused on proceeds of crime.

The CPC in articles 83-85 regulates the preventive seizure and freezing, by the Prosecutor's Office through the guarantee judge. The Comptroller-General's Office has the power to seize and freeze administratively. The Special Fund for the Administration of Assets of the Prosecutor-General's Office was created through article 86 CPC.

Colombia does not have legislation on the confiscation of funds transformed or converted in part or in full into other property, the value based confiscation of assets intermingled with property acquired from legitimate sources, or of benefits derived from the assets (art. 31 4-6)

The "dynamic burden of proof" is regulated for the non-conviction based forfeiture, not for the confiscation system. However, the case law on the topic is still developing. The Constitutional Court decided recently that in non-conviction based forfeiture on the basis of illicit enrichment, the Prosecutor's Office has the obligation to prove the illicit origin of the asset.

In Colombia, the banking secrecy can be lifted by order of the FIU, the Prosecutor-General's Office, the Public Attorney's Office and the Comptroller-General's Office, without requirement of a judicial order.

Statute of limitations; criminal record (articles 29, 41)

The Colombian criminal legislation foresees that the criminal action prescribes in the same time as the maximum term of the sanction foreseen by law, if it establishes a prison sanction, but in no case less than 5 or more than 20 years. For public officials the statute of limitations is increased by 50%. The case in which the alleged offender has evaded the administration of justice is not regulated. In corruption offences the statute of limitation is between 6 and 20 years.

In Colombia, only national sentences constitute criminal records.

Jurisdiction (article 42)

Colombia has established most of the parameters for jurisdiction established by the Convention.

Consequences of acts of corruption; compensation for damage (articles 34, 35)

Colombia implements article 34 of the Convention through articles 22 and 101 of the CPC, in which the restitution to the previous legal state is regulated, with a view to eliminate the effects of an offence. Additionally, Law No. 472 of 1988 allows to protect diffuse or collective interests and allow for the review of a contract by popular action. In the administrative field, the Attorney-General can request the suspension of an administrative proceeding, contract or its execution with a view to preventing damage from State property.

Articles 11 c) and 102 CPP regulate and complement the criminal proceedings with regard to the full compensation of the victim in the criminal process. There is operational experience in the implementation of this law, although not yet in corruption offences. Also, Law No. 610 of 2000 and the Anticorruption Statute regulate the process of fiscal responsibility, a process which addresses the assets of an official who has by his action or omission damaged State assets, whether the conduct amounts to a criminal offence or not. The Anticorruption Statute modified article 401 of the Criminal Code, regulating as a reason for mitigating punishment the reparation of damages or the reintegration of the misappropriated asset.

Specialized authorities and inter-agency coordination (articles 36, 38, 39)

The independent authorities responsible for law enforcement and specialized in the fight against corruption are the Prosecutor-General's Office, the Attorney-General's Office and the Comptroller-General's Office.

The Prosecutor-General's Office, the Attorney-General's Office and the Comptroller-General's Office have an agreement that authorizes them to share information on cases. The Judicial Police has no specialized investigators on corruption. There is also a Coordination Committee against corruption between these three and more relevant institutions. However, it was mentioned that information-sharing meets challenges and limitations, particularly regarding the exchange of evidence and in the investigation phase.

Colombia has a very active cooperation with the private sector, through the High-Level Reporting Mechanism against Corruption, in cooperation with the OECD and the Basel Institute, and through investigation meetings on concrete cases. However, it was mentioned that in the private sector there is still a lack of knowledge on the rules and possibilities of participation. Colombia has taken measures to encourage its citizens to report corruption; however, it is noted with great concern that reporting corruption in Colombia is not considered as a safe practice for the physical and labour security of the whistle-blower.

2.2. Successes and good practices

- Colombia has concrete cases of implementation and judicial sentences and convictions, with broad statute of limitation and severe sanctions for the offences established in accordance with the Convention, taking into account the general sanction framework (art. 29, art. 30 para. 1).
- Colombia has presented sentences in which an act of corruption was the grounds for deciding the cancellation or annulment of contracts in which the State was a party (art. 34).
- Colombia actively promotes the cooperation with the private sector at the national and international levels. IN this context, Colombia is the pilot country in the High-Level Reporting Mechanism against Corruption, in cooperation with the OECD and the Basel Institute, as well as the Working Group B-20 of the Group of 20 (art. 39 para. 1).

2.3. Challenges in implementation

It is recommended that Colombia

- Follow up on the application of articles 407 and 433 of the Criminal Code with a view to monitoring that they are applied to cases of “promise” of an undue advantage. In case the judiciary changes, its legal interpretation and thus, the existing caselaw, a legislative clarification should be taken into account (art. 15 para. a) and 16 para. 1).
- Consider criminalizing the passive bribery of foreign public officials and officials of public international organizations (art. 16 para. 2).
- Consider adapting the legislation to article 18 of the Convention (paras. a and b).
- Study the possibility to adapt its internal legislation to address corruption in the private sector with regard to all employees of a private entity, and without requirement of damage for the company (art. 21 para. a and b).
- Reach, in the offence of money-laundering, the concept of “use” (art. 23 para. 1 b i).
- Furnish officially copies of its anti- money-laundering legislation (art. 23 para 2 d).
- Reach, in the legislation on obstruction of justice, the elements of use of physical violence against witnesses and, in a specific rule, the production of evidence (art. 25 para. a).
- Adapt its legislation to include threats or intimidation against judicial and law enforcement officials (art. 25 para. b).
- Colombia could study the necessary measures to criminalize the preparation for a corruption offence (art. 27 para. 3).
- In the cases in which the alleged offender has evaded the administration of justice, to extend statute of limitation (art. 29).
- It could also be studied to adjust the extension of the statute of limitations of private persons to the one of public officials, in corruption cases (art. 29).
- It is recommended that Colombia, in accordance with the fundamental principles of its legal system, consider establishing proceedings through which a public official accused of a corruption offence could be removed, suspended or reassigned (art. 30 para. 6)
- Reach, in its legislation on confiscation, the confiscation of funds transformed or converted into other property, the value based confiscation of assets intermingled with property acquired from legitimate sources, or of income or other benefits derived from such proceeds of crime (art. 31 4-6)
- Consider the possibility to conclude agreements or arrangements with other States for the relocation of witnesses, experts and victims (art. 32 para. 3).
- Strengthen the effectiveness of the protection of whistle-blowers in criminal, administrative and labour law. It could be considered to make efforts for the same protection in the disciplinary proceedings (art. 33).
- Make efforts so that the relevant authorities develop strategies for financial investigations, confiscation and compensation for damage in corruption cases from

the beginning of a case on, including through information-sharing among institutions (art. 31 and 35).

- Take measures to allow its criminal, disciplinary and administrative investigation institutions to share among them, without prejudice to guaranteeing the confidentiality of the preliminary stage, all relevant information on corruption cases at any stage of the process, and improve the mechanisms for information-sharing (art. 38).
- Colombia is encouraged to continue implementing measures to disseminate anti-corruption policies with the private sector (art. 39 para. 1), and to continue strengthening the mechanisms for anonymous and secure reporting (art. 39 para. 2).
- Colombia could study the adoption of a principle to take into account previous convictions in another state in criminal proceedings on corruption offences (art. 41).
- Colombia could consider establishing its jurisdiction on all cases in which the offence is committed against one of its nationals (art. 42 para. 1 c).
- Colombia is encouraged to carry out in practice the pertinent consultations in cases in which several States parties conduct an investigation, prosecution or judicial proceeding in respect of the same conduct (art. 42 para. 5).

2.4. Technical assistance needs identified to improve implementation of the Convention

Colombia has indicated interest in receiving technical assistance to improve the implementation of Chapter III:

- Model legislation and a summary of good practices and lessons learnt (art. 16 para. 2)
- Exchange of good practices and international cooperation on seizure, confiscation and non-conviction based forfeiture; particularly training programmes for the authorities responsible for the tracing of assets and for the management of seized, frozen or confiscated assets.
- Exposure of the personnel of the Judicial Council to comparative experiences in its functions, in the framework of continuous professional development.

3. Chapter IV: International cooperation

3.1. Observations on the implementation of the articles under review

Extradition; transfer of sentenced persons; transfer of criminal proceedings (articles 44, 45, 47)

The requirements for extradition are contained in article 35 of the Political Constitution, article 18 of the Criminal Code, articles 490 to 504 of the CPC and the extradition treaties. Colombia does not make extradition conditional on the existence of a treaty but can extradite in accordance with the domestic legislation, on the basis of the principle of reciprocity. The Convention can be used as legal basis for extradition, although when there is a bilateral treaty, this bilateral

instrument is used primarily. Currently Colombia has signed 13 bilateral and 2 multilateral treaties.

Colombia requires dual criminality, further a minimum penalty of 4 years (art. 493 CPC), which the majority of but not all corruption offences comply with. However, the domestic legislation only applies when no applicable international instrument contains a lower minimum penalty.

Colombia extradites its nationals, and does so as a frequent practice, for conduct committed after 17 December 1997. For conduct committed before, Colombia applies the principle “aut dedere aut judicare” on the basis of its treaties and as a general principle of international law.

The extradition system in Colombian law is a mixed judicial-administrative system. Extradition must be requested through a diplomatic note in Spanish. In conformity with article 492 of the CPC, the offer or granting of extradition is at the discretion of the Government, but it requires a previous and positive judgment of the Supreme Court of Justice which reviews formal requirements. There is no appeal. Against the final decision of the National Government, the remedy of remonstrance is possible. In the simplified procedure, the person sought for extradition can waive the proceeding before the Court.

There have not yet been passive extradition requests in corruption cases, and only two cases of active extradition.

The extradition for connected offences is not implemented in Colombian legal order. Extradition is not possible for political offences, but corruption offences are not considered political.

The bilateral treaties in which Colombia is a party, as well as article 509 of the CPC, establish the requirements of the provisional arrest of the person sought for extradition.

The procedure foreseen does not include the possibility of consulting with the Government of the requesting State before the Colombian State refuses extradition.

Colombia has concluded three agreements on the transfer of sentenced persons.

Colombia cannot waive its jurisdiction, however, in cases in which several countries have jurisdiction, Colombia can transfer the case to another State.

Mutual legal assistance (article 46)

Judicial cooperation is regulated in articles 484-489 of the CPC and the 16 bilateral and two multilateral treaties on mutual legal assistance in which Colombia is a party.

Colombia does not require dual criminality, and can facilitate assistance in proceedings against legal persons.

The bilateral and multilateral treaties take priority over domestic law, and paragraphs 7 and 9-29 can be applied directly, although there are no cases yet.

Colombia has designated four central authorities to deal with MLA requests: The Prosecutor-General’s Office and the Ministry of Justice in criminal matters, the Attorney-General’s Office in disciplinary matters and the Comptroller-General’s

Office in matters of fiscal responsibility and recovery. Requests for mutual legal assistance are received directly by the respective central authority, or through diplomatic channels. The competent authorities for the execution of the request can communicate directly with their foreign counterparts. The exchange of information is carried out in a formal manner and upon prior request.

It seems that there could be cases in which the competences and responsibilities of the four authorities could be overlapping or in which the authorities could work on the same conduct from different perspectives. Also it seems there is no clarity among all national and foreign authorities on the designation of the central authorities.

Requests can in urgent circumstances be made orally, by telex, facsimile and email; however, although orally is not the preferred way. Witness statements taken by videoconference are a frequent practice.

Colombia does not limit the application of article 46 exclusively to international cooperation in criminal matters, but understands it in a way that also covers the international cooperation in administrative matters.

The time for the execution of a request is on average between 6 months and one year; simple requests can be implemented in two or three days.

According to the legislation, costs of legal assistance are borne by the interested party; however, several of the treaties in which Colombia is a party contain regulations that are in line with the Convention.

Law enforcement cooperation; joint investigations; special investigative techniques (articles 48, 49, 50)

Colombia considers the Convention as legal basis for mutual cooperation in law enforcement. The Colombian police cooperates with the police forces of other countries, directly or through INTERPOL. Several authorities have concluded Memoranda of Understanding with their counterparts abroad. Further, Colombian authorities interact with the Egmont Group (FIU), the World Customs Organization (National Customs), the Ibero-American Network for International Legal Cooperation (IberRed, Prosecutor-General's Office) and the StAR/Interpol Global Focal Point Initiative (Comptroller-General's Office). The Prosecutor-General's Office promotes initiating the cooperation through the Hemispheric Network of the Organization of American States.

Article 487 CPC regulates joint investigations.

Colombia has regulated controlled delivery, electronic surveillance and undercover operations, and further techniques such as the selective search in databases, without previous judicial authorization; no specific bilateral or multilateral agreements on the use of such techniques have been concluded but Colombia can proceed on the basis of the Convention.

3.2. Successes and good practices

- Colombia has presented a request for extradition on the basis of the Convention (art. 44)

- With the adoption of the simplified extradition procedure, Colombia demonstrates that it is implementing innovative solutions to make extradition as expeditious as possible (art. 44 para. 9).
- Colombia has not yet refused technical assistance in any corruption cases (art. 46).
- Colombia cooperates through international networks such as the IberRed to expedite the process of MLA (art. 46 paragraph 24).
- Colombia has adopted the special investigative techniques mentioned in the Convention and additional techniques, and the Prosecutor-General's Office has issued a resolution on their application in the framework of international cooperation (art. 50).

3.3. Challenges in implementation

- Colombia could consider modifying its legislation in a way to grant the extradition of a person for a corruption offence even if it is not punishable under its own domestic law (art. 44 para. 2)
- Colombia could advise its authorities to apply the Convention directly when a request for extradition includes several separate offences some of which are not extraditable by reason of their period of imprisonment (Art. 44 para. 3).
- Colombia should consider regulating the issue of discrimination specifically in the context of extradition or otherwise apply the Convention directly (art. 44 para. 15).
- Colombia should adapt its legal system in a way that the requesting State would have an opportunity to present its opinions before its extradition request is refused (art. 44 para. 17).
- Colombia could, without prior request, transmit information relating to criminal matters to a competent authority in another State Party where it is believed that such information could assist the authority in undertaking or successfully concluding inquiries and criminal proceedings, and Colombia is encouraged to consider this possibility (art. 46 para. 4-5).
- It is recommended that Colombia apply paragraphs 9 to 29 of the Convention to requests for MLA if it is not bound by an MLA treaty with the other State, and to apply these paragraphs in lieu of a treaty if they facilitate cooperation (art. 46 para 7, 9-29).
- It is recommended that Colombia apply the Convention directly to guarantee the safe conduct of a person transferred from another State to testify or otherwise provide assistance in obtaining evidence, with regard to convictions prior to his or her departure from that other State (art. 46 para. 12).
- It is recommended that Colombia ensure that the competences and responsibilities of the four central authorities be well defined and explained in the Directory of Competent National Authorities of UNODC. Also Colombia is encouraged to create a mechanism which ensures the swift exchange of information

between the four central authorities, and to raise awareness with all players in the institutional system on their designation (art. 46 para. 13).

- It is recommended to encourage the Attorney-General's Office and the Prosecutor-General's Office to notify the Secretary-General of the United Nations of the acceptable language or languages (art. 46 para. 14)
- Colombia is recommended to directly apply article 46 paragraph 20 on the confidentiality of a received request (art. 46 para. 20).
- It is recommended that Colombia apply the Convention directly with priority over other instruments in case those contain broader grounds for refusal (art. 46 para. 21).
- With regards to the costs, it is recommended that Colombia apply the international instruments directly, as an agreement between the States parties (art. 46 para. 28)
- It is recommended that Colombia consider promoting the exchange of personnel and other experts, including the designation of liaison officials (art. 48 para. 1e))

3.4. Technical assistance needs identified to improve implementation of the Convention

Colombia has requested technical assistance to improve international cooperation:

- Training for officials on mutual legal assistance, and awareness-raising on the use of the Convention in this matter (art. 46).
- Strengthening the practice of special investigative techniques in corruption cases (art. 50)
- Capacity-building on international cooperation for the recovery of assets.